

10.000 permisos de extranjeros, atascados en la Subdelegación

Los graduados sociales denuncian que se tarda un año en resolver un expediente

La tramitación de expedientes de extranjería en la Subdelegación del Gobierno está totalmente colapsada, hasta el punto de que se han acumulado más de 10.000 casos. Así lo denuncia el Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, que añade que un caso tarda actualmente un año en resolverse. Según este colectivo de profesionales, este atasco está afectando gravemente a las empresas, muchas de las cuales necesitan mano de obra y no pueden disponer de ella. La situación, para el presidente del colegio, Francesc Blasco, «se aleja mucho de una administración moderna, eficaz y eficiente».

ANGEL JUAMPENI/TARRAGONA
ajuampeni@diariadetarragona.com

«Un colapso administrativo que perjudica a empresas y trabajadores». Así definía ayer el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, Francesc Blasco, la situación que se vive actualmente en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona en lo que respecta a la tramitación de expedientes de extranjería. Los graduados sociales, profesionales que se encargan del derecho laboral y fiscal de las empresas, se encargan de tramitar ante la Administración central aproximadamente el setenta por ciento de las solicitudes de empleo de los inmigrantes.

Blasco recordaba que el pasado mes de julio finalizó el proceso extraordinario de regularización, «que no solucionó nada. Muchos de aquellos expedientes se han denegado o bien están pendientes de resolverse». Por ello, apunta que «hay muchos trabajadores extranjeros que están aquí, que quieren trabajar y que no se reconoce su situación administrativa».

El presidente provincial de los graduados sociales se refirió también a la etapa y a las relaciones tenidas con el anterior subdelegado del Gobierno, Raúl Navarro, cuando el estamento oficial comenzaba a saturarse de expedientes. «Le propusimos confeccionar un programa informático, firmando un acuerdo con la Administración central, que no suponía ningún dispendio económico para la misma».



El año pasado, las colas de extranjeros en la Subdelegación se alargaban hasta la calle.

NEVIL OLIVE/DT

El acuerdo suponía agilizar los trámites «y se ganaban entre tres o cuatro meses en la tramitación de un expediente». Los graduados sociales hubieran hecho buena parte del trabajo que actualmente hacen los funcionarios, el poner en el ordenador los datos del expediente. Según Blasco, el entonces subdelegado acogió la idea «con ganas» y se realizaron los primeros pasos para ver si el ministerio daba su autorización.

Pero con el cambio de subdelegado, la iniciativa está completamente parada. Francesc Blasco afirma que con el actual tuvieron

una visita de cortesía y un cambio de impresiones. «Nos dijo que comprendía el problema, pero la situación sigue igual». Respecto al programa informático, «sigue frío». Por ello, los graduados sociales se sienten, en cierta forma, impotentes ante esta situación. «Nosotros ya no podemos hacer nada más».

Problema social

Esta situación de colapso está provocando que haya empresarios que necesitan mano de obra dentro de la legalidad y que no puedan conseguirla, y también que hay tra-

bajadores en una difícil situación y que necesitan mantenerse.

Todo este atasco está afectando gravemente a muchas empresas, según denuncian los graduados sociales. Las industrias no pueden abrir nuevos centros de trabajo porque les falta esta mano de obra. El problema se agrava en sectores como el de hostelería, construcción y agricultura. Este último es quizás el más problemático ya que los payeses no pueden esperar un año para recoger las cosechas. «Es muy duro tener que decir a un empresario que se tendrá que esperar un año. Ellos no se pueden crear esta situación».

Francesc Blasco apuntaba como ejemplo el de una cadena de restaurantes, con capital catalán, que no puede abrir nuevos establecimientos en las comarcas tarraconenses por falta de mano de obra.

Pero las críticas de los graduados sociales no van dirigidas a los funcionarios, «porque ellos hacen lo que pueden, no tienen la culpa de la problemática». Según el presidente del colegio profesional, el «vuelva usted mañana» ha vuelto a asomar en la Subde-

SUBDELEGACIÓN

«El trabajo se ha multiplicado por cinco»

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Tarragona han reconocido el incremento importante de trabajo que se ha producido en los últimos meses. En este sentido, indicaron que «los funcionarios están realizando un esfuerzo para solucionar la situación y están trabajando más horas». Sin embargo, en estos momentos hay un volumen de trabajo cinco veces superior al que había hace sólo dos años. Además, cada día están entrando más expedientes: «No se puede absorber la cantidad de solicitudes que van entrando», apuntaron las mismas fuentes.

Actualmente, en la Subdelegación están trabajando quince funcionarios, sin que den abasto. Por ello, se informó de que se está trabajando «para conseguir más recursos, tanto económicos como de infraestructura y de personal». Según apuntó a mediados del año pasado el entonces subdelegado, Raúl Navarro, se habían pedido al Ministerio veinte funcionarios más y sólo se concedieron cuatro.

legación del Gobierno. Añade que en caso de no poner un remedio rápido a esta problemática, podrían volver a surgir problemas sociales, como los acontecidos a principios del año pasado en Barcelona, con el cierre de inmigrantes en las iglesias.

Respecto a dónde se encuentran estos trabajadores que están a la espera de la concesión del permiso de residencia, afirma que no es difícil de imaginar que algunos están trabajando, aunque Blasco no tiene constancia de ello: «Se presupone que hay muchos empresarios que tienen la tentación de coger a un trabajador sin papeles», a pesar de que las sanciones que impone Inspección de Treball van desde el millón a los tres millones de pesetas.

Desaparecidos

Francesc Blasco destacaba que la mayoría que presentan la documentación es para poder trabajar en las comarcas tarraconenses. Pero también apuntaba un caso ocurrido en la provincia. Un empresario del sector de la hostelería se puso en contacto con trabajadores sudamericanos, pagó el billete a once de ellos (que le costó más de dos millones de pesetas) y, una vez aquí, coresiguieron el correspondiente permiso de trabajo. Incluso pagó un piso para que se pudieran alojar. Cual fue la sorpresa del empresario que un mes después de llegar a España, los once sudamericanos desaparecieron. Y esto ocurrió en plena temporada alta.

El colapso está provocando la paralización de inversiones